



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO**

PROTOCOLO PARA LA EMISIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.

SEPTIEMBRE, 2021.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. SIGLAS Y ACRÓNIMOS	5
3. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO	6
4. ALCANCES	7
5. MARCO JURÍDICO	8
5.1. Internacional	8
5.2. Nacional	8
5.3. Local	8
5.4. Jurisprudencia	8
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN	9
7. ELEMENTOS PARA CONFIGURAR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO	9
8. FORMAS EN QUE SE MANIFIESTA LA VIOLENCIA POLÍTICA	10
9. TIPOS DE VÍCTIMAS Y SUS DERECHOS	13
10. TIPOS DE RESPONSABILIDADES	14
11. MEDIDAS DE PROTECCIÓN	16
11.1. PLAN DE SEGURIDAD	19
12. ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO	20
12.1. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero	20
12.1.1. Atribuciones	20
12.1.2. Procedimiento	20
12.2. Tribunal Electoral del Estado de Guerrero	21
12.2.1. Atribuciones	21
12.2.2. Procedimiento	22
12.2.3. Sanciones	23
12.3. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero	24
12.3. Atribuciones	24
13. ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	28
13.2 Secretaría de Seguridad Pública	30

13.3	Secretaría de la Mujer:.....	32
13.4	Secretaría de Salud.....	33
13.5	Tribunal Superior de Justicia.	33
13.6	Fiscalía General del Estado.....	34
13.7	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.	35
14.	MEDIDAS DE PROTECCIÓN.	36
14.1	Son medidas de protección de emergencia las siguientes:	36
14.2	Son medidas de protección preventivas las siguientes:	37
14.3	Son medidas de protección de naturaleza civil las siguientes:	37
15.	APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN	38
15.1.	Análisis de riesgo.....	39
16.	ANEXOS	42
17.	REFERENCIAS.	52

1. INTRODUCCIÓN

Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres implica un trabajo interdisciplinario bastante complejo, pero no imposible. En el ámbito electoral los esfuerzos no son menores, además de salvaguardar la igualdad entre ciudadanos, se debe procurar la observancia de la normativa electoral a fin de erradicar cualquier tipo de discriminación o violencia política contra la mujer en razón de género, pues de lo contrario, la democracia, que es la base de cualquier sistema político, se vería mermada.

El presente instrumento es coadyuvante al fortalecimiento de la cultura de la legalidad, a través de la profesionalización de las personas servidoras públicas y de la concientización de la ciudadanía para saber cómo actuar en caso de que se presente una situación de violencia política, de igual forma, está encaminado a establecer la manera en que las autoridades deben comunicarse para asegurar que ningún caso de violencia quede impune o desatendido.

Si bien es cierto que ha habido avances en el tema, aún hacen falta esfuerzos conjuntos para alcanzar las metas que aquí se proponen. Se busca, principalmente, llegar a una ciudadanía comprometida y responsable en el tema, pero también, a autoridades públicas informadas y dispuestas a erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. El gran reto ahora consiste en establecer el procedimiento que se debe seguir por parte de cada una de las autoridades involucradas, a fin de que exista una comunicación interinstitucional en caso de que se presente una denuncia por Violencia Política en razón de género.

Este reto implica también modificar la percepción de la ciudadanía respecto a los procesos de denuncia, así como fomentar la participación ciudadana, **para que, de actualizarse el supuesto, hacer uso de las instituciones para interponer la denuncia correspondiente,** desarrollar las estrategias y mecanismos necesarios para que quienes sean las víctimas de violencia política de género lo denuncien de manera efectiva, y que la brecha existente entre lo teórico y lo fáctico, no sea tan abismal. La presencia de las mujeres en el ámbito político ha sido progresiva, en la medida que ellas mismas han luchado por el reconocimiento y el ejercicio pleno de sus derechos en la esfera pública, específicamente en la toma de decisiones del quehacer político.

Para esto, las instituciones del Estado mexicano cuentan con una serie de obligaciones convencionales y constitucionales, derivadas de los tratados

internacionales de los que México es parte, así como de la CPEUM y las leyes emanadas de ésta. Desafortunadamente, en México aún existe la necesidad de observar el cumplimiento efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, por lo que se debe garantizar el acceso igualitario entre hombres y mujeres a las funciones públicas del país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

2. SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CPGRO	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
CG	Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
CCE	Coordinación de lo Contencioso Electoral del IEPC GRO.
CQyD	Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC GRO
IEPC GRO	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
INE	Instituto Nacional Electoral
LGMDE	Ley General en Materia de Delitos Electorales
LGIMH	Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
LIPEEG	Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero
LGV	Ley General de Víctimas
LGRA	Ley General de Responsabilidades Administrativas
LGSMIME	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
LAMVLV GRO	Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero
LOFGR	Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

LSMIME GRO	Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.
RQyD GRO	Reglamento de Quejas y Denuncias del IEPC GRO
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SE	Secretaría Ejecutiva del IEPC Guerrero
TEEGRO	Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
VPMRG	Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

3. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO

Este Protocolo busca responder a la necesidad que tiene este Instituto Electoral de implementar con prontitud y debida diligencia, un análisis de riesgo y la aplicación de las medidas de protección correspondientes, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, al presentarse quejas o denuncias relacionadas con esta materia y se soliciten medidas de protección. También constituye una medida emergente para guiar la actuación de las autoridades involucradas, dado que la ley no establece explícitamente la forma de coordinación entre ellas en el dictado de medidas de protección para asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género; y por lo tanto, para realizarlo se consideran las atribuciones ya establecidas que cada una de estas autoridades tiene conforme a su legislación aplicable y con base en el cumplimiento de los derechos de las presuntas víctimas.

Asimismo, tiene como propósito orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, facilitar la implementación del análisis de riesgo y aplicación de medidas de protección, así como dar cumplimiento al deber de debida diligencia, a partir de la unificación de criterios, conceptos y procedimientos, un protocolo de actuación sirve para estandarizar el tratamiento de una determinada problemática e identificar las responsabilidades particulares de las personas, áreas o instituciones.

Así, los objetivos de este instrumento son:

- Facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género;

- **Servir de guía para las autoridades** involucradas en la elaboración del análisis de riesgo y aplicación de medidas de protección derivadas de violencia política contra las mujeres en razón de género, de conformidad con sus atribuciones;
- Favorecer una adecuada coordinación entre las instituciones del Estado, para hacer frente a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

4. ALCANCES

Con respecto a los alcances, el presente Protocolo es una herramienta que se **construye**^[MGL1] a partir de la necesidad de coordinación que debe existir entre las autoridades para atender los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, **además de servir como una guía para otras autoridades**, sobre todo, para la elaboración del análisis de riesgo y la adopción de medidas de protección.

Respecto de su obligatoriedad, la SCJN ha establecido algunos criterios respecto de la naturaleza jurídica de los protocolos, señalando que sólo constituye *una guía* orientada a garantizar el acceso a la justicia, realizada, además, con el fin de proveer a quienes juzgan una herramienta de auxilio para su función¹.

Esto es, el Protocolo no establece nuevas atribuciones para las instituciones comprendidas -no puede hacerlo-, más bien, éstas se comprometen a incorporar en su actuación la perspectiva de género, atender, conforme a sus facultades y atribuciones, la violencia contra las mujeres en razón de género y actuar de manera inmediata y de tal forma que no queden en la impunidad los casos en que ésta se acredite, así como asegurar que las investigaciones se realicen con la debida diligencia y de acuerdo con los estándares locales, nacionales e internacionales, esto en aras de que la autoridad facultada resuelva lo correspondiente respecto a la adopción de **medidas**^[MGL2] de protección, y cuando estas sean competencia de otra autoridad, se dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias.

En otras palabras, debe analizarse qué autoridades deben vincularse en el caso de **que se considere que** deben dictarse medidas de protección y diseñar una metodología que haga efectivas las mismas, ello para generar un plan de seguridad adecuado, involucrando a las autoridades para garantizar de manera preventiva la integridad de las mujeres que dicen ser víctimas de violencia política en razón de género; así como el ejercicio sus derechos político-electorales.

¹Tesis: 1a. XIV/2014 (10a.), rubro: **PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. NO PUEDE SER EL FUNDAMENTO LEGAL DE UNA SENTENCIA DE AMPARO.** Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el treinta y uno de enero de 2014.

5. MARCO JURÍDICO

5.1. Internacional

- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDW).
- Recomendación general núm. 28 relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la CEDAW.
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará).
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5.2. Nacional

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- Ley General de Partidos Políticos.
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- Ley General en Materia de Delitos Electorales.
- Ley General de Víctimas.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
- Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

5.3. Local

- Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
- Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
- Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.
- Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Número 467.
- Reglamento de Quejas y Denuncias del IEPCGRO.

5.4. Jurisprudencia

Tesis aislada 1a. CLX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro ***“DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN*** (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015 [dos mil quince], tomo I, página 431).

Jurisprudencia 48/2016, de rubro: ***“VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”***.

jurisprudencia 21/2018 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: ***“VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”***

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La vigencia del presente protocolo será por tiempo indeterminado y podrá ser reformado, adicionado o derogado con la aprobación de la mayoría de los integrantes del Consejo General del Instituto; previa presentación, análisis, discusión y aprobación de la CQyD, una vez que hubiese sido consensado con las autoridades que en el presente protocolo intervienen.

7. ELEMENTOS PARA CONFIGURAR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.

Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es importante puntualizar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la jurisprudencia 21/2018, de rubro: ***“VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”***, estableció los elementos que permiten identificar cuándo se está en presencia de algún acto o conducta que pudiera constituir violencia política en contra de una mujer por razón de su género; a saber:

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;
2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;
3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;
4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y
5. Se basa en elementos de género, es decir: a) se dirige a una mujer por ser mujer, b) tiene un impacto diferenciado en las mujeres; c) afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Estos puntos son una guía para determinar si se trata de un caso de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, debido a la complejidad del tema, es necesario que cada caso se analice de forma particular para poder definir las acciones inmediatas que se deben tomar ante una víctima de violencia política y no dejar impunes los hechos. Si no se cumplen estos puntos, quizá se trate de otro tipo de violencia, lo cual de ninguna manera le resta importancia al caso, simplemente, se requerirá de otro tipo de atención y de la intervención de otras autoridades.

8. FORMAS EN QUE SE MANIFIESTA LA VIOLENCIA POLÍTICA

De acuerdo con el artículo 405 bis de la LIPEEG, la violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, por medio de las siguientes conductas:

- a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política;
- b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;
- c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;
- d) Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir su registro;
- e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;

- f) Cualquier otra acción que lesionen o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

Asimismo, en adición a lo anterior el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé entre otras, las siguientes conductas de las cuales puede expresarse violencia política contra las mujeres:

- I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;
- II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género;
- III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;
- IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
- V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;
- VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
- VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;
- VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;
- IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;

XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad.

XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

9. TIPOS DE VÍCTIMAS Y SUS DERECHOS.

La Ley General de Víctimas es el instrumento jurídico nacional que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, y de conformidad con su artículo 4, establece los siguientes tipos de víctima:

- **Víctimas directas:** personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo - individual o colectivamente- económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
- **Víctimas indirectas:** familiares y/o personas físicas a cargo de la víctima directa con las que tengan una relación inmediata, así como las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
- **Víctimas potenciales:** personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
- **Son víctimas los grupos,** comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Por su parte, en su artículo 5, se reconoce que existen grupos en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo de ser víctima en razón de su edad, género, orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, etcétera. Por esto, es importante que se considere el elemento de **interseccionalidad**, es decir otros elementos de la identidad de las **mujeres** (edad, etnicidad, orientación sexual, etcétera) que las exponen a múltiples y simultáneas formas de discriminación o desventaja que puedan agravar la violencia política y, por lo tanto, requieran de una atención especializada según sus particularidades y grado de vulnerabilidad; por ejemplo, una mujer transexual o una mujer indígena.

Por cuanto a los derechos de las víctimas la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 52, prevé los derechos de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, los cuales son los siguientes:

- I. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos;
- II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;
- III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención;
- IV. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;
- V. Recibir información médica y psicológica;
- VI. Contar con un refugio, mientras lo necesite;
- VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;
- VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con éstos, y
- IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.

10. TIPOS DE RESPONSABILIDADES

La violencia política contra las mujeres en razón de género está reconocida como una conducta sancionable vía penal, electoral o administrativa. En cualquiera de los casos, las autoridades competentes están obligadas a reparar los daños o restituir los derechos violados.

A continuación, se describen las instituciones competentes para recibir denuncias, y las sanciones aplicables:

DELITOS ELECTORALES		
DELITO	AUTORIDAD COMPETENTE PARA RECIBIR DENUNCIA	SANCIÓN
Delitos de VPMRG señalados en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales.	Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero.	Pena privativa de la libertad o sanción pecuniaria, que van de 200 a 400 días multa y prisión de cuatro a seis años, de acuerdo a la conducta cometida.

INFRACCIONES ELECTORALES			
INFRACCIONES	AUTORIDAD COMPETENTE PARA RECIBIR QUEJA O DENUNCIA	AUTORIDADES COMPETENTES DE IMPARTIR JUSTICIA Y RECIBIR MEDIOS DE IMPUGNACIÓN	SANCIONES

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

Conductas señala en el artículo 405 bis, de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero	Ante cualquier órgano del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, incluidos sus Consejos Distritales	Tribunal Electoral del Estado de Guerrero	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amonestación pública. ▪ Multa. ▪ Reducción de financiamiento. ▪ Supresión total del financiamiento. ▪ Cancelación de registro del partido político. ▪ Pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si está registrado, su cancelación. ▪ Incorporación al Registro Local de Personas Sancionadas en materia de VPG.
--	---	---	--

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS		
INFRACCIONES	AUTORIDAD COMPETENTE PARA PROMOVER O REMITIR LA QUEJA O DENUNCIA	AUTORIDADES COMPETENTES DE IMPARTIR JUSTICIA Y RECIBIR MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Faltas graves detalladas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.	Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y los Órganos Internos de Control de los entes públicos estatales o municipales	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero

Respecto a las responsabilidades administrativas existentes a nivel local, se debe hacer una interpretación profunda de los documentos reformados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. Tal y como lo establece el artículo 57 de la Ley General de Sanciones Administrativas, constituye una **infracción grave** la realización de alguna de las conductas descritas en el artículo **20 Ter**, de la *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*.

Dicha Ley, en el numeral referido, señala todos los supuestos en los que se puede configurar VPMRG. Por lo tanto, cualquiera de las conductas ahí descritas, significará una **infracción o falta grave**. Las quejas o procedimientos iniciados por violencia política de género serán presentadas por la Secretaría de la Contraloría y

Transparencia Gubernamental o el Órgano Interno de Control de la institución gubernamental de la que se trate.

En este sentido, es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero el órgano jurisdiccional competente para conocer de las faltas graves cometidas por servidores públicos, a saber:

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero

Artículo 4. *El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero tiene competencia para:*

[...]

*III. Conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con **faltas graves** promovidas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y los órganos internos de control de los entes públicos estatales o municipales, o por la Auditoría Superior del Estado, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos.*

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable;

[...]

Es así que la competencia recae, por remisión, en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En este sentido no existe aún una disposición expresa en la normativa legal de dicho Tribunal, que prevea la atención de la VPMRG, sin embargo, de una interpretación a las reformas llevadas a cabo en abril 2020 a diversas leyes generales, se concluye que es la instancia administrativa, en el ámbito local, la encargada de emitir una sentencia por responsabilidad administrativa.

La VPMRG ocurre en el marco de los derechos político-electorales, y puede evidenciarse en dos momentos específicos: en el periodo de un proceso electoral o en el ejercicio de su función pública. En ambos casos, este tipo de violencia podrá sancionarse por la vía penal, electoral o administrativa.

11. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Por medio de la adopción de medidas cautelares o de protección en materia electoral se podrá lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la presunta infracción, y así evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el Reglamento de Quejas y Denuncias.

La Comisión de Quejas y Denuncias del CG, a propuesta de la CCE, podrá aprobar las medidas cautelares siguientes:

- a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
- b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;
- c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;
- d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y
- e) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite.

Cabe mencionar que el artículo 123 del Reglamento de Quejas y Denuncias, establece que cuando las medidas cautelares o de protección no sean competencia de este Instituto, la Coordinación por conducto de la Secretaría Ejecutiva dará vista de inmediato a la autoridad competente para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y atribuciones.

En ese sentido, es importante señalar que de acuerdo al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran contempladas las siguientes medidas de protección y providencias precautorias durante la investigación, en las cuales el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de medidas de protección idóneas cuando se considere que existe un riesgo en contra de la seguridad de la víctima. Siendo las siguientes:

- I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido.
- II. Limitación de asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre.
- III. Separación inmediata del domicilio;
- IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;
- V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;
- VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;
- VII. Protección policial de la víctima u ofendido;

- VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;
- IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y
- X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

Medidas de protección que de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto podrán ser tomadas en cuenta por la autoridad administrativa electoral, al momento de realizar el análisis de riesgo para implementar las medidas de protección que se consideren necesarias para garantizar la seguridad de la víctima, pudiendo solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las mismas.

Ahora bien, para efectos de realizar el análisis de riesgo y plan de seguridad, atendiendo al principio de debida diligencia, es necesaria la coordinación de las diversas autoridades que tengan competencia en la materia, las cuales, en uso de sus atribuciones legales, deben coadyuvar entre sí para lograr una atención integral a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género a fin de propiciar una sinergia institucional que asegure la participación política de las mujeres en un contexto libre de violencia.

Tal como lo establece el artículo 27 de la LGAMVLV, las medidas de protección se definen como: actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Asimismo, establece que, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, **los Organismos Públicos Locales Electorales y los órganos jurisdiccionales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere** el Capítulo de medidas de protección.

Así también, la Sala Superior del TEPJF, ha delineado que las medidas cautelares *constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento jurídico para prevenir posible afectación a un derecho, a los principios rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente a cualquier resolución de fondo y definitiva en la materia.*

11.1. PLAN DE SEGURIDAD.

Para elaborar un plan de seguridad los elementos que se deben tomar en cuenta, además de los que considere conducentes la autoridad encargada de ejecutar el mismo, son los siguientes:

- Diagnóstico e identificación de las amenazas más específicas; las autoridades deberán realizar un diagnóstico e identificar las amenazas más graves o las que más se relacionan con las vulnerabilidades principales de quien solicita las medidas.
- Evaluar las vulnerabilidades de la quejosa; de acuerdo a las condiciones sociales, culturales, económicas y todas aquellas que rodean a la solicitante de las medidas.
- Capacidades; al momento de elaborar el plan de seguridad es necesario que las autoridades tomen en cuenta sus recursos materiales y humanos, a fin de ejecutar debidamente el mismo.
- Convertir las vulnerabilidades en objetivos del plan de seguridad; una vez analizadas las amenazas y conocidas las vulnerabilidades de la solicitante de las medidas de protección, el plan de seguridad debe centrarse en ello.

Ahora bien, en algunos casos, para decidir sobre como implementar el plan de seguridad, **quien lo ejecute primeramente debe atender a las manifestaciones de la parte quejosa hechas en su demanda²**, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida de protección y por ende el plan de seguridad, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la parte quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, porque para resolver sobre la referida medida, **se debe partir del supuesto, comprobado o**

² Expediente SUP-REC-73/2020.

no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos – dado que las autoridades que investiguen cualquier asunto que verse sobre cualquier tipo de violencia contra la mujer deben actuar con la debida diligencia, tomando las medidas que se consideren necesarias para el caso en concreto³, de ahí que, el diseño del plan de seguridad, no debe someterse a un procedimiento rígido si no que por el contrario, se debe atender a la naturaleza de la medida que la autoridad administrativa o jurisdiccional determine, para poder materializar el referido plan.

12. ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO

Bajo este propósito resulta oportuno, describir las atribuciones de las autoridades involucradas en la observancia e implementación del presente protocolo a efecto de identificar las competencias estratégicas a implementar en el otorgamiento de las medidas de protección que resulten necesarias.

12.1. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero

12.1.1. Atribuciones

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procesos de participación ciudadana, conforme a la Ley electoral local y a la diversa de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

12.1.2. Procedimiento

De conformidad con el artículo 439 de la LIPEEG, tratándose de hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, la

³ Sirve de apoyo la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro; **DELITOS CONTRA LAS MUJERES. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE SU INVESTIGACIÓN ESTÁN LLAMADAS A ACTUAR CON DETERMINACIÓN Y EFICACIA A FIN DE EVITAR LA IMPUNIDAD DE QUIENES LOS COMETEN.**

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por conducto de la Coordinación de lo Contencioso Electoral instruirá el procedimiento especial en cualquier momento, es decir, dentro y fuera de proceso electoral.

El trámite y substanciación de los procedimientos especiales sancionadores en materia electoral, le corresponderán a la Secretaría Ejecutiva, a través de la Coordinación de lo Contencioso Electoral.

Tratándose de asuntos relacionados con VPMRG, la Coordinación deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir de su recepción.

Una vez que la Coordinación admita la denuncia, emplazará a las partes para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión y debido emplazamiento de la parte denunciada, haciéndole saber la infracción que se le imputa, asimismo, se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.

Una vez desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, el expediente se deberá turnar de forma inmediata al Tribunal Electoral, a fin de que emita la resolución que en Derecho corresponda exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, así como un informe circunstanciado.

Se debe abundar sobre las medidas cautelares y de protección.

12.2. Tribunal Electoral del Estado de Guerrero

12.2.1. Atribuciones

De conformidad con los Artículos 105, 106, 132, y 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Tribunal Electoral es un órgano permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral local.

Su objetivo es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y la protección de los derechos político- electorales de los ciudadanos, mediante un sistema de medios de impugnación que brinde certeza y definitividad a los procesos electorales y demás instrumentos de participación ciudadana.

De acuerdo con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 439 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Tribunal Electoral del Estado es el

órgano competente para resolver los procedimientos especiales sancionadores que se instauren con motivo de violencia política contra las mujeres en razón de género.

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, al resolver los procedimientos sancionadores por VPMRG, deberá considerar ordenar las **medidas de reparación integral** que correspondan considerando al menos las siguientes:

- a) Indemnización de la víctima;
- b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia;
- c) La disculpa pública;
- d) Medidas de seguridad y cualquier otra para asegurar el ejercicio del cargo, y
- e) Medidas de no repetición.

En este apartado es necesario precisar que las medidas de reparación integral son diversas a las medidas de protección, respecto de las cuales el Tribunal Electoral también tiene el deber de emitir las atendiendo al principio de debida diligencia.

Ahora bien, como se precisó en la introducción del presente protocolo, si bien este, no puede establecer nuevas atribuciones o facultades a las autoridades que intervienen en el mismo, dado que no constituye una ley adjetiva, sin embargo, tratándose de las medidas de protección el Tribunal Electoral Local, con libertad de jurisdicción y atendiendo al caso en concreto, podrá dictar las medidas que considere pertinentes y necesarias para salvaguardar los derechos de quien denuncie.

12.2.2. Procedimiento.

El Tribunal Electoral, recibirá del Instituto Electoral el expediente original formado con motivo de la denuncia y el informe circunstanciado respectivo.

Recibido el expediente en el Tribunal Electoral, el Presidente lo turnará al Magistrado o Magistrada Ponente que corresponda, quién deberá:

- a) Radicar la denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento, por parte del Instituto, de los requisitos previstos en esta Ley;
- b) Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley, realizar u ordenar al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más expedita.
- c) Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el Magistrado Ponente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de su turno, deberá poner a consideración del pleno del Tribunal

Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador, y

d) El Pleno en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.

Así también, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, cuando se alegue una vulneración a los derechos político electorales por actos de violencia política en razón de género puede conocerlo por la vía del Juicio Electoral Ciudadano.

Por otra parte, en concordancia con los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 80, numeral 1, inciso h), y 84 numeral 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el artículo 48 Bis, fracción III, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de los artículos 440, 442, 470 y 474 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que si bien el procedimiento especial sancionador es la vía idónea para conocer de quejas y denuncias para determinar las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan en materia de violencia política en razón de género, ello no obsta para que el juicio de la ciudadanía resulte procedente cuando se considere que se afectan los derechos político-electorales en un contexto de violencia política contra las mujeres en razón de género, siempre que la pretensión no sea exclusivamente sancionadora y no se pretenda un análisis subjetivo de la motivación de la conducta o del impacto diferenciado que ésta pueda tener en razón de género cuando esto no resulta evidente a partir de elementos objetivos. En los juicios de la ciudadanía la autoridad judicial competente deberá ponderar la existencia de argumentos relacionados con violencia política en razón de género y la posibilidad de analizarlos de manera integrada a los hechos, actos u omisiones que formen parte del planteamiento que se haga sobre la afectación a los derechos político-electorales, sin que sea procedente la imposición de sanciones a los responsables, para lo cual deberá remitir el caso a la instancia administrativa competente del trámite de denuncias por tales hechos o dejar a salvo los derechos de la parte actora para ese efecto. En el caso de que exista una tramitación simultánea de una queja y un juicio de la ciudadanía, las autoridades responsables de su tramitación y resolución, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ser especialmente cautelosas de no incurrir en una doble sanción por los mismos hechos u omisiones.

12.2.3. Sanciones.

- Amonestación pública
- Multa
- Reducción de financiamiento
- Supresión total del financiamiento
- Cancelación de registro del partido político
- Pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si está registrado su cancelación
- Incorporación al Registro local de personas sancionadas en materia de VPMRG.

12.3. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero

12.3. Atribuciones

De acuerdo con el artículo 29 y 83 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado de Guerrero, tiene por objeto prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales, conforme a lo previsto en el Código Penal Federal y demás leyes aplicables en la materia.

Ahora bien, entre las medidas que el Ministerio Público puede ordenar, de conformidad con el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes;

- I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;
- II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;
- III. Separación inmediata del domicilio;
- IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;
- V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;
- VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;
- VII. Protección policial de la víctima u ofendido;
- VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;

IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y

X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

12.4 SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Por otra parte, de conformidad con la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, se prevé un Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual está integrado de las siguientes dependencias; Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Finanzas y Administración; la Secretaría de Seguridad Pública; la Secretaría de Educación Guerrero; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Fomento Turístico; la Secretaría de Asuntos Indígenas; la Secretaría de la Mujer, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema; Secretaría de la Juventud; el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; la Fiscalía General del Estado; el Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Ordinaria de Equidad y Género; el Tribunal Superior de Justicia; la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos; el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación; las instancias de atención a las mujeres en los Municipios; y las organizaciones civiles especializadas en derechos humanos de las mujeres.

12.4.1 Facultades

El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tiene entre sus facultades las siguientes:

- I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;
- II. Formular y conducir la política estatal integral, en concordancia con la política nacional, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;
- III. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna;
- IV. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado;
- V. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres;

VI. Garantizar una adecuada coordinación entre el gobierno estatal y los municipios, para ello establecerá Sistemas Regionales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

VII. Realizar a través de la Secretaría de la Mujer y con el apoyo de las instancias municipales de atención a la mujer, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que la protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;

VIII. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas;

IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

X. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;

XI. Ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos,

XII. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

XIII. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley.

Sentado lo anterior, cabe enfatizar que el artículo 443 bis de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que cuando las medidas cautelares o de protección sean competencia de otra autoridad, la Coordinación de lo Contencioso Electoral a través de la Secretaría Ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias.

En ese tenor, el aludido Sistema Estatal, entre otras facultades, tiene la de ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, de ahí que, en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, tiene la obligación de coadyuvar con el cumplimiento o dictado de la medida cautelar que sea necesaria para lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o para evitar que se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales.

Por su parte, la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, prevé el dictado de medidas de seguridad de acuerdo a la naturaleza de la violencia del caso concreto ya que de conformidad con su artículo 9, existen diversos tipos de violencia, entre las cuales, están las siguientes;

I. Violencia física: toda agresión en la que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, ya sea que provoque o no lesiones internas, externas, o ambas;

II. Violencia psico-emocional: el patrón de conducta que consiste en actos u omisiones, cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, condicionamientos, coacciones, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias o de abandono, negligencia, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

III. Violencia sexual: es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

IV. Violencia patrimonial: es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

V. Violencia económica: es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas.

En la Ley 553 del Estado de Guerrero, como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se contempla aun la *violencia verbal, simbólica, la feminicida, ni la digital*, sin embargo, es importante señalarlas por tratarse de acciones reiteradamente presentes en la escena pública.

- **Violencia verbal:** Es la forma de violencia que busca herir y menospreciar a la persona a través de comentarios sarcásticos, insidiosos, insultos y gritos, que, si bien no llegan al daño físico, si tiene un impacto psicológico.

- **Violencia simbólica:** Se caracteriza por ser una violencia invisible, soterrada, implícita, que opera al nivel de las representaciones y busca deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política. (Krook y Restrepo, 2016, 148)
- **Violencia feminicida:** Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformado por un conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en actos de homicidio y muerte violenta de las mujeres.
- **Violencia Digital:** son delitos de divulgación no consentida de imágenes, videos íntimos o sexuales, así como de “ciberacoso” a través de las tecnologías de la información.

Las conductas típicas de esta modalidad de violencia son: las prácticas de tolerancia de la violencia, basadas en elementos de género y ejercidas dentro de la esfera pública o privada, que tengan como resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.

Ahora bien, es necesario precisar las atribuciones de las dependencias que tienen mayor injerencia en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dadas sus facultades. Lo anterior, a fin de que cuando se esté ante un caso de VPMRG, de manera oportuna y eficaz de ser el caso, se realice el análisis de riesgo y se dicten las medidas de protección que correspondan en el ámbito de sus competencias.

13. ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

13.1 Secretaría General de Gobierno.

Corresponde a la Secretaría General de Gobierno:

Entre otras cosas, corresponde a la Secretaría General de Gobierno, quien preside el referido Sistema, lo siguiente;

- I. Diseñar la política integral, con perspectiva de género, para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres;

II. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

III. Coordinar y dar seguimiento a las acciones del gobierno estatal y de los municipios, en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en concordancia con la política nacional y estatal;

IV. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

V. Establecer las políticas públicas transversales y con perspectiva de género que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales.

VI. Vigilar el respeto de los derechos laborales de las mujeres y establecer condiciones para eliminar la discriminación de las mujeres por razones de género para el acceso al trabajo;

VII. Establecer mecanismos para erradicar el hostigamiento y acoso sexual a las mujeres en los centros laborales y aplicar procedimientos para sancionar a la persona agresora.

VIII. Prevenir la violencia contra las mujeres con programas y acciones afirmativas dirigidas especialmente aquellas que, por su edad, etnia, condición social, económica, educativa u otra, han tenido menos oportunidades de empleo;

IX. Proponer la actualización de las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo para la protección de las mujeres trabajadoras en términos de la Ley;

X. Crear mecanismos internos de denuncia para las mujeres víctimas de violencia laboral en el ámbito público, con independencia de cualquier otro procedimiento jurídico que inicien ante una instancia diversa.

XI. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

XII. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres;

XIII. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres

XIV. Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres;

XV. Realizar el Diagnóstico Estatal y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

XVI. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del Programa a los que se refiere esta ley;

XVII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

De lo anterior, se advierte que a la Secretaría General de Gobierno le corresponde, entre otras cosas, ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Sistema Estatal, con la finalidad de evaluar la eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres

De ahí que, es necesaria su intervención a fin de que cuando se emita una medida cautelar o de protección dentro de cualquier procedimiento instaurado por un caso de violencia política contra las mujeres en razón de género, la Secretaría General de Gobierno, instruya a la dependencia integrante del Sistema, a efecto de que se brinde la atención conducente o coadyuve en el cumplimiento de la referida medida.

13.2 Secretaría de Seguridad Pública.

Corresponde a dicha Secretaría lo siguiente:

I. Capacitar a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, para atender los casos de violencia contra las mujeres;

II. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

III. Integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los ámbitos público y privado;

V. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor;

VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le correspondan;

VII. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

X. Promover la integración laboral de las mujeres reclusas en los centros de readaptación social.

Cabe enfatizar que, entre otros, los objetivos de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, es erradicar y prevenir cualquier tipo de violencia contra la mujer, en ese sentido, una de las facultades que la citada ley le confiere a la Secretaría de Seguridad Pública, es la de tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades del Sistema, para alcanzar los referidos objetivos.

Entonces, al estar en presencia de VPMRG, la Secretaría de Seguridad Pública, deberá brindar el apoyo necesario a las autoridades competentes que emitan medidas de protección dentro de los procedimientos que se instauren por VPMRG, las cuales están previstas en el artículo 13 de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.

Las medidas de protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Las medidas cautelares constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento jurídico para prevenir la posible afectación a un derecho, valor o principio protegido por el sistema jurídico, para garantizar el cumplimiento de alguna obligación jurídica de forma inmediata y eficaz y previamente a cualquier resolución de fondo y definitiva en la materia.

13.3 Secretaría de la Mujer:

Corresponde a dicha Secretaría lo siguiente:

I. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema;

II. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Estatal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, **así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación**, y la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en el estado y municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia;

III. Elaborar el Programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema;

IV. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres;

V. Colaborar con las instituciones del Sistema en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios;

VI. Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia prevista en la ley;

VIII. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna;

IX. Contar con asesores legales que representen a las mujeres a través de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer;

X. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres.

XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, De lo anterior se desprende que la Secretaria de la Mujer está facultada para evaluar las medidas de prevención, atención y erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, en ese sentido, cuando las medidas cautelares o de protección sean decretadas en cualquier procedimiento que derive de un caso de violencia política contra las mujeres en razón de género, y la referida secretaria tenga conocimiento, le corresponde proponer las medidas y las acciones que considere pertinentes, con la finalidad de erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

13.4 Secretaría de Salud.

Corresponde a dicha Secretaría lo siguiente:

- I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con perspectiva de género, la política de prevención, atención y erradicación de la violencia en su contra;
- II. Brindar por medio de las instituciones del sector salud, de manera integral e interdisciplinaria, atención médica y psicológica de calidad y con perspectiva de género a las víctimas;
- IV. Establecer programas y servicios profesionales y eficaces, con horario de veinticuatro horas en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres

De las facultades enunciadas que la Ley le otorga a la Secretaría de Salud, se desprende que le corresponde ofrecer de manera integral e interdisciplinaria, atención médica y psicológica de calidad y con perspectiva de género a las víctimas de violencia contra las mujeres, entonces, cuando se le requiera a fin de que otorgue una evaluación psicológica o médica, derivado de una medida cautelar o de protección dictada en un procedimiento por violencia política contra las mujeres en razón de género, sin dilaciones debe practicar las evaluaciones correspondientes, para ello debe contar con programas y servicios profesionales y eficaces, con horario de veinticuatro horas.

13.5 Tribunal Superior de Justicia.

Corresponde a dicho Tribunal lo siguiente:

El Artículo 48 de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, señala que corresponde al TSJ:

- I. Capacitar a los Jueces de Primera Instancia y de Paz, así como de los Secretarios de acuerdos, para atender los casos de Violencia contra las mujeres;
- II. Coadyuvar en la difusión del procedimiento Judicial en materia de Violencia contra las mujeres;
- III. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias en coordinación con las demás autoridades para alcanzar los objetivos de la presente ley.

13.6 Fiscalía General del Estado.

Corresponde a la Fiscalía lo siguiente:

I. Promover la formación y especialización de Agentes de la Policía Investigadora ministerial, Agentes del Ministerio Público y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres;

II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

III. Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba atención médica de emergencia;

IV. Facilitar a la víctima, la elección del sexo del médico, terapeuta y asesor jurídico que le presten atención, misma que será integral, y buscará erradicar los mitos sociales, contruidos en torno a la violencia sexual, y en general, en torno a todos los tipos y modalidades de violencia.

V. En los dictámenes de psicología víctima, sólo se establecerá la sintomatología que se presenta con motivo de la violencia de género, sin cuestionar la veracidad de lo dicho por la víctima.

VI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;

VII. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;

VIII. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;

IX. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres;

X. Expedir y ejecutar las órdenes de protección y garantizar la integridad física de quienes denuncian;

XI. Diseñar las políticas en materia de procuración de justicia en contra de la violencia hacia las mujeres;

XII. Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos que tienen las víctimas de delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexuales y de violencia intrafamiliar, así como de las agencias especializadas que atienden estos delitos;

Es relevante señalar que, en el ámbito de su competencia, **la Fiscalía General del Estado, tiene la facultad de expedir y ejecutar las medidas de protección y garantizar la integridad física de quienes denuncian algún tipo de violencia**

contra las mujeres, en ese tenor, cuando se le de vista con los hechos que constituyen VPMRG, deberá determinar lo que a su representación social corresponda, esto es, si decreta o no las medidas cautelares o de protección, y en su caso, su ejecución.

Sirve de orientación, el criterio de rubro y texto siguiente:

ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. ES OBLIGATORIO PARA LOS JUZGADORES DAR VISTA DE OFICIO A LA AUTORIDAD MINISTERIAL CUANDO DE AUTOS ADVIERTAN DICHA CIRCUNSTANCIA. *En términos de los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), se advierte que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que limita total o parcialmente su goce o ejercicio, esto es, la violencia contra la mujer incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad; por lo que el Estado también es responsable de los actos de violencia contra las mujeres perpetrados por particulares en tanto no adopte medidas con la diligencia debida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En ese sentido, cuando el juzgador advierta de autos que una mujer sufre, sufrió o puede sufrir algún tipo de violencia, oficiosamente deberá dar vista con tales hechos a la autoridad ministerial, a fin de que ésta determine lo que a su representación social corresponda. (Registro digital: 2009256, Aislada, Materias(s): Constitucional, Penal, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 18, mayo de 2015 Tomo III, Tesis: I.9o.P.82 P (10a.), Página: 2094)”*

13.7 Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Corresponde a la Comisión lo siguiente:

- I. Intervenir en el Desarrollo de Programas permanentes de impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres tendientes a erradicar la Violencia contra ellas.
- II. En coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero, implementar cursos de capacitación para prevenir la Violencia contra las mujeres, dirigidos a los

docentes de los diferentes niveles, quienes a su vez se convertirán en multiplicadores.

III. En coordinación con las instituciones públicas, desarrollar programas de capacitación dirigidos a todos los servidores públicos, para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres.

IV. Canalizar a las Instancias correspondientes a las mujeres víctimas de violencia cuando acudan a esta Institución solicitando apoyo.

V. Tomar medidas y realizar acciones necesarias, en coordinación con las demás Autoridades para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley.

VI. Solicitar al Ejecutivo del Estado, la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, cuando la persistencia de delitos en contra de mujeres así lo demande.

Cuando la Comisión advierta hechos que constituyan VPMRG, deberá canalizar a las instancias correspondientes a las mujeres víctimas de violencia cuando acudan a esta Institución solicitando apoyo, asimismo deberá tomar medidas en coordinación con las autoridades que considere para prevenir y erradicar la violencia.

14. MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Las medidas de protección consagradas en la Ley Número 553 de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero son personalísimas e intransferibles y podrán ser;

I. De emergencia;

II. Preventivas, y

III. De naturaleza Civil

De acuerdo a la citada ley, las medidas de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

14.1 Son medidas de protección de emergencia las siguientes:

I. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;

II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad, y

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia.

14.2 Son medidas de protección preventivas las siguientes:

I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del Agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia.

Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzo contundentes que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima;

II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima;

III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima;

IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la Víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos;

V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos;

VI. Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la Víctima en el momento de solicitar el auxilio, y

VII. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas.

14.3 Son medidas de protección de naturaleza civil las siguientes:

- I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes;
- II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal;
- III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio;
- IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias, y
- V. Obligación alimentaria provisional e inmediata.

Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de éstos en los juzgados civiles que corresponda.

Cabe puntualizar que el artículo 13 de la Ley de referencia, establece que las medidas deberán ser dictadas por la autoridad competente, en ese sentido y toda vez que su fracción XIV, le confiere al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la facultad de ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, y para tal efecto se auxiliara de las dependencias que lo integran, de ahí que, al estar frente a un caso violencia política contra las mujeres en razón de género, el Sistema es competente para auxiliar a la autoridad a la autoridad competente, en el cumplimiento las medidas cautelares o de protección que considere necesarias o ejecutar las que diversa autoridad emita en el procedimiento correspondiente que sea instaurado por violencia política.

Entonces, cuando los hechos sean del conocimiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, le corresponderá otorgar las medidas emergentes y preventivas⁴ antes descritas, para tal efecto tomará en consideración lo siguiente:

- I. El riesgo o peligro existente;
- II. La seguridad de la víctima, y
- III. Los elementos con que se cuente.

15. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

⁴ Artículo 17, de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.

Recapitulando, es importante señalar que la Secretaría General de Gobierno, al ser quien preside el referido Sistema, es la encargada de coordinar las acciones que correspondan, a efecto de que las autoridades competentes emitan, ejecuten y cumplan con las medidas de protección.⁵

Por su parte a la Secretaría de Seguridad Pública, le corresponde brindar el apoyo necesario a las autoridades competentes que emitan medidas de protección.⁶

Ahora bien, es preciso señalar las medidas que desde el ámbito electoral la Comisión de Quejas y Denuncias, puede decretar en un asunto de violencia política contra las mujeres en razón género⁷, son las siguientes:

- a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
- b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;
- c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;
- d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y
- e) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite.

15.1. Análisis de riesgo.

Se entiende por análisis de riesgo aquél que identifica la proximidad real (actual/inmediato) o inminente (posible/probable) de que una persona sea dañada en su vida, salud, familia, personas cercanas, integridad física, mental o emocional, patrimonio y/o cualquier otro derecho, incluyendo los políticos y electorales, atendiendo a causas o condiciones vinculadas al género.

El análisis de riesgo es también una de las medidas cautelares que pueden ser ordenadas cuando es probable la existencia de riesgo.

Esta evaluación es necesaria para identificar los factores que pueden poner en riesgo la integridad de las mujeres, ponderar la situación y de acuerdo con ello, elaborar un plan de seguridad. Es importante señalar que, derivado de este análisis se determinará si las medidas de protección son procedentes, y en caso de así

⁵ Artículo 88, del Reglamento de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.

⁶ Artículo 87, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.

⁷ Artículo 124, del Reglamento de Quejas y Denuncias y 438 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

serlo, se establecerá cuáles son las que se dictarán de acuerdo con el caso en particular.

¿Qué acciones inmediatas deben tomarse en casos de violencia política?

Cuando se observen casos que constituyan VPMRG, las autoridades deberán adoptar, mínimamente, las acciones siguientes, que deben tomarse como una especie de lista de verificación:

- a) Escuchar a la víctima —sin esperar de ella un comportamiento determinado— a fin de estar en condiciones de establecer cuáles son las mejores medidas que se deben tomar para su caso. Ninguna de las actitudes, medidas, comentarios o preguntas que se hagan en la entrevista, deberá sugerir que la víctima es responsable de lo que le sucedió;
- b) En caso de ser necesario, canalizar a la víctima para que sea atendida física y psicológicamente de forma inmediata;
- c) Asesorar a la víctima sobre los elementos necesarios para acreditar la violencia de la que fue objeto y la mejor forma de conservar y presentar la evidencia;
- d) Ubicar si existen otras víctimas además de la que hace la solicitud de intervención, a fin de brindarles la atención necesaria;
- e) Solicitar que se realice un análisis de riesgo. En un marco de colaboración, se puede solicitar a la instancia correspondiente que se realice este análisis y diseñe un plan de seguridad —que tome en cuenta a la víctima, las implicaciones culturales y de género en el caso concreto, así como el derecho a continuar participando en un proceso electoral o en asuntos públicos— con medidas de protección que deberán ejecutar las autoridades correspondientes;
- f) Dar aviso y contactar con las autoridades correspondientes que estén en capacidad de atender el caso;
- g) Otorgar las medidas de protección que correspondan y, en su caso, las medidas necesarias para evitar que los daños sean irreparables. Estas medidas deberán definirse en congruencia con las aspiraciones de las víctimas. Los ministerios públicos y los órganos jurisdiccionales, el órgano administrativo electoral, pueden brindar este tipo de medidas;
- h) Brindar la asesoría necesaria para que la víctima esté en condiciones de tomar una decisión respecto a las acciones jurídicas que podría llevar a cabo;
- i) Contactar a la víctima con organizaciones y redes de apoyo;
- j) En caso de que se trate de una campaña violenta contra la víctima mediante radio o televisión, dar vista al Instituto Nacional Electoral, a fin de que se tomen las medidas necesarias, haciendo públicas las razones.

Este análisis retoma cuatro aspectos del entorno de la víctima para ponderar las posibilidades de que el daño o riesgo se concrete, a saber:

1. Antecedentes;
2. Análisis de los hechos que conforman la agresión;
3. Análisis de la actividad de la víctima de violencia política; y,
4. Análisis del contexto en el que lleva a cabo dicha actividad.

Cabe enfatizar que el artículo 123 del Reglamento de Quejas y Denuncias, establece que cuando las medidas cautelares o de protección no sean competencia del Instituto Electoral, es decir cuando escapen del ámbito electoral o sea necesario dictar una diversa que no esté prevista en la ley electoral, la Coordinación por conducto de la Secretaría Ejecutiva dará vista de inmediato a la autoridad competente para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y atribuciones.

Ahora bien, las medidas de protección establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales corresponden al sistema de justicia penal. Para que sean decretadas por la autoridad ministerial debe existir una denuncia, de la que derive una investigación preliminar. Éstas se dictan en contra de la o las personas presuntamente responsables;

Artículo 137. Medidas de protección.

El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes:

- I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;*
- II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;*
- III. Separación inmediata del domicilio;*
- IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;*
- V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;*
- VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;*
- VII. Protección policial de la víctima u ofendido;*
- VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;*

IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, a un refugio o albergue temporal;

X. Reingreso de la víctima o la persona ofendida a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

Una vez emitidas las medidas de protección en materia de violencia contra las mujeres que tiene el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, así como el Ministerio Público, se advierte que como autoridades involucradas en materia de violencia política contra la mujer, pueden dictar medidas de protección en el ámbito de sus respectivas competencias, de ahí que, cuando se haga de su conocimiento un caso de VPMRG, es indispensable que después de los análisis que tienen que realizar para ponderar la aplicación de la medida, los cuales ya fueron desarrollados, consideren si la decretan o si esta no es de su competencia; en ese caso, deberán dar vista a la autoridad que, de acuerdo a las facultades y atribuciones antes descritas, sea competente para decretarla.

16. ANEXOS

Como ya se ha mencionado el presente protocolo, tiene la finalidad de servir como guía tanto para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, como para las demás instituciones involucradas con el tema, definiendo y concentrando toda la información relevante y relacionada para la correcta elaboración de un análisis de riesgo y en su caso, la emisión de medidas de protección, principalmente, por ser este su objetivo.

A través de cuatro anexos que se incluyen en este apartado, se precisa de manera concreta y sencilla los pasos a seguir por parte de las correspondientes autoridades, cuando se presente ante estas un caso de violencia política; lo que implica que se faciliten los siguientes aspectos:

- En primer lugar, identificar a la presunta víctima o víctimas con datos generales, así como reconocer con base a lo citado en el numeral 9 del presente protocolo, qué tipo de víctima es. *Anexo 1.*
- Posteriormente, el anexo 2, denominado *Encuadre de los hechos denunciados*, servirá de apoyo para relacionar los actos denunciados y conforme a una serie de cuestiones se determinará si estos corresponden a casos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, o

bien, a otro tipo de violencia, y en este último supuesto, considerar canalizarla a la autoridad competente;

- En caso de estar frente a un hecho relacionado con violencia política en contra de las mujeres por razón de género, se puntualizarán en el anexo 3, los aspectos que va a considerar la autoridad para realizar su respectivo análisis de riesgo, el cual dará pie a considerar procedentes o improcedentes las medidas de protección;
- Y, por último, en el anexo 4 se plasmará el plan de seguridad, considerando en el análisis de riesgo citado en el párrafo anterior, y según el caso en particular.

Los anexos que servirán de herramienta para conocer la ruta a seguir, son los que a continuación se señalan:

- Anexo 1. Identificación de la(s) víctima(s).
- Anexo 2. Encuadre de los hechos denunciados.
- Anexo 3. Análisis de riesgo.
- Anexo 4. Plan de seguridad.

Anexo 1. Identificación de la(s) víctima(s)

Datos de la(s) víctimas
Número de expediente (PES):
Nombre: Sexo: Edad: Domicilio: Teléfono: Correo electrónico: Actividad actual: Cargo político al que aspira o cargo público que ocupa: Instituto Político al que pertenece:
<i>(Se sugiere que en este punto se determinen elementos de interseccionalidad tales como: Edad, Etnicidad, orientación sexual, condición de discapacidad)⁸</i>
Nombre de acompañantes o red de apoyo: Teléfono: Dirección:
Víctimas indirectas <i>(Familiares y/o personas físicas a cargo de la víctima directa con las que tengan una relación inmediata, así como las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.)⁹</i>
Víctima potencial <i>(Personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Generalmente son los colaboradores, simpatizantes o cualquier otro ciudadano afectado)¹⁰</i> Edad: Sexo: Domicilio: Teléfono: Correo electrónico:
Grupos, comunidades u organizaciones sociales que constituyen víctimas colectivas¹¹: Nombres de las víctimas que conforman el colectivo: Domicilio: Teléfono del representante: Correo electrónico:

⁸ Artículo 6 de La Ley General de Víctimas.

⁹ *Ibidem*, artículo 5, segundo párrafo.

¹⁰ *Ibidem*, artículo 5, tercer párrafo.

¹¹ *Ibidem*, último párrafo.

Anexo 2. Encuadre de los hechos denunciados

Encuadre de los hechos denunciados, relacionados con VPMRG ¹²	
Lugar(es) o espacio(s) donde se verificaron los hechos:	
Testigos de los hechos:	
1. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado). a) Ámbito político, económico, social, cultural, civil b) Dentro de la familia o unidad doméstica c) En la comunidad d) En un partido u otro instituto político e) Mediática f) Digital g) Intento de feminicidio	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2. ¿Por quién es perpetrado el hecho relacionado con VPMRG? a) Por el Estado o sus agentes b) Por superiores jerárquicos c) Colegas de trabajo d) Partidos políticos o representantes de los mismos e) Medios de comunicación y sus integrantes f) Un particular y/o un grupo de personas	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3. Tipo de violencia: a) Simbólica b) Verbal c) Patrimonial d) Económico e) Físico f) Sexual g) Psicológico h) Otro, describa _____	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Describa la conducta	

¹² Jurisprudencia 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO"

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

4. ¿Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Describa la conducta	
5. ¿El acto u omisión se basa en elementos de género?	
a) Se dirige a una mujer por ser mujer	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Tiene un impacto diferenciado y desventajoso en la mujer	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) La afecta desproporcionadamente.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Describa la conducta:	
6. Probables ejecutores o sus características y cuál es la causa probable de la conducta violenta:	
7. De acuerdo a las descripciones de la conducta señaladas en los numerales que anteceden, seleccione las que coincidan con la siguiente lista ¹³ :	
a. Obstaculiza a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b. Se ocultó información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c. Se ocultó la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d. Se proporcionó a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir su registro.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e. Obstaculiza la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f. Se incumplieron las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

¹³ Artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y artículo 405 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

g. Restringe o anula el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género.	
h. Se ocultó información u omitió la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades.	Sí [] No []
i. Se proporcionó a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;	Sí [] No []
j. Se proporcionó información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso.	Sí [] No []
k. Se proporcionó a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones.	Sí [] No []
l. Se obstaculizó la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.	Sí [] No []
m. Se realizó o distribuyó propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales.	Sí [] No []
n. Se difama, calumnia, injuria o realiza cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos.	Sí [] No []
o. Se divulgaron imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género.	Sí [] No []
p. Se amenazó o intimidó a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada.	Sí [] No []
q. Se impide, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto.	Sí [] No []
r. Se restringen los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos.	Sí [] No []
s. Se imponen, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función.	Sí [] No []
t. Se discrimina a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su	Sí [] No []

reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
u. Se ejerció violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
v. Se limitó o negó arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
w. Se obligó a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
x. Se obstaculizaron o impidió el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
y. Se limitó o negó arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
z. Se impusieron sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
aa. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. Especifique la conducta:	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

En caso, de que los hechos o conductas, no estén relacionados con VPMRG, autoridad a la que conforme a sus atribuciones y/o competencias se canalizará, conforme al *Protocolo para la emisión y adopción de medidas de protección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero*:

Anexo 3. Análisis de riesgo

Análisis de Riesgo

A través de esta evaluación se identificarán los factores de riesgo, las vulnerabilidades y la conducta de los sujetos asociados a la violencia política que pueden poner en peligro integridad de las mujeres (víctima(s)) o sus derechos político-electorales.

Ya que se identificaron los casos que constituyen VPMRG conforme al anexo 2, ahora las autoridades involucradas deberán adoptar, mínimamente, las acciones siguientes:

Lista de Verificación

- a) Escuchar a la víctima —sin esperar de ella un comportamiento determinado— a fin de estar en condiciones de establecer cuáles son las mejores medidas que se deben tomar para su caso. Ninguna de las actitudes, medidas, comentarios o preguntas que se hagan en la entrevista, deberá sugerir que la víctima es responsable de lo que le sucedió;
- b) En caso de ser necesario, canalizar a la víctima para que sea atendida física y psicológicamente de forma inmediata;
- c) Asesorar a la víctima sobre los elementos necesarios para acreditar la violencia de la que fue objeto y la mejor forma de conservar y presentar la evidencia;
- d) Ubicar si existen otras víctimas además de la que hace la solicitud de intervención, a fin de brindarles la atención necesaria;
- e) Solicitar que se realice un análisis de riesgo. En un marco de colaboración, se puede solicitar a la instancia correspondiente que se realice este análisis y diseñe un plan de seguridad —que tome en cuenta a la víctima, las implicaciones culturales y de género en el caso concreto, así como el derecho a continuar participando en un proceso electoral o en asuntos públicos— con medidas de protección que deberán ejecutar las autoridades correspondientes;
- f) Dar aviso y contactar con las autoridades correspondientes que estén en capacidad de atender el caso;
- g) Otorgar las medidas de protección que correspondan y, en su caso, las medidas necesarias para evitar que los daños sean irreparables. Estas medidas deberán definirse en congruencia con las aspiraciones de las víctimas. Los ministerios públicos y los órganos jurisdiccionales, el órgano administrativo electoral, pueden brindar este tipo de medidas;
- h) Brindar la asesoría necesaria para que la víctima esté en condiciones de tomar una decisión respecto a las acciones jurídicas que podría llevar a cabo;
- i) Contactar a la víctima con organizaciones y redes de apoyo;
- j) En caso de que se trate de una campaña violenta contra la víctima mediante radio o televisión, dar vista al Instituto Nacional Electoral, a fin de que se tomen las medidas necesarias, haciendo públicas las razones.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Aspectos a ponderar

1. Antecedentes;
2. Análisis de los hechos que conforman la agresión;
3. Análisis de la actividad de la víctima de violencia política; y,
4. Análisis del contexto en el que lleva a cabo dicha actividad.

Resultado del análisis de riesgo

De acuerdo con la ponderación, ¿es procedente dictar medidas de protección?

Anexo 4. Plan de seguridad

Plan de seguridad [13]

Diagnóstico e identificación de las amenazas más específicas. *(identificar las amenazas más graves o las que más se relacionan con las vulnerabilidades principales de quien solicita las medidas).*

- 1.
- 2.
- 3.

Evaluar las vulnerabilidades de la quejosa o solicitante. *(condiciones sociales, culturales, económicas y todas aquellas que rodean a la solicitante de las medidas)*

- 1.
- 2.
- 3.

Capacidades. *(evaluar los recursos humanos, materiales y financieros de la autoridad que ejecutará las medidas de protección, para el otorgamiento diligente y oportuno)*

Convertir las vulnerabilidades en objetivos del plan de seguridad. *(una vez analizadas las amenazas y conocidas las vulnerabilidades de la solicitante, el plan de seguridad debe centrarse en ello, para una implementación efectiva de las medidas de protección,)*

17. REFERENCIAS.

- Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.
- Reglamento de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.
- Reglamento de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.
- Reglamento de Quejas y Denuncias y 438 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
- Tesis: 1a. XIV/2014 (10a.), rubro: ***PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. NO PUEDE SER EL FUNDAMENTO LEGAL DE UNA SENTENCIA DE AMPARO.*** Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el treinta y uno de enero de 2014.